



Ajuste fiscal:

# ¿Fabricante de pobres?

Miguel Ignacio Purroy

En términos reales, el gasto público desembolsado del primer cuatrimestre ha disminuido 30 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Ello está generando enorme conflictividad social (universidades, gremios de empleados públicos...). La escasez de caja continuará por tres meses más... Más allá del problema temporal de caja permanece impávida la dura realidad de que el gobierno necesita financiamiento por aproximadamente 8.000 millones de dólares (8 billones de bolívars, equivalentes a un tercio del presupuesto total de gastos). De este monto, poco más de la mitad es para amortizar deuda que vence este año y el resto es endeudamiento nuevo.

evidente insuficiencia. ¿Qué ha pasado con esas medidas tres meses después? La noticia buena ha sido la mejoría de los precios petroleros, que por efecto del conflicto del Medio Oriente han subido de 15 a 23 \$/bls. Y la mala es que, como de costumbre, el respiro petrolero le ha hecho olvidar al gobierno su propósito de enmienda fiscal. De tal forma que de las medidas de febrero sólo nos ha quedado su lado feo: una devaluación de 32 por ciento en apenas tres meses, un repunte de la inflación y más impuestos. De la reducción del gasto público nadie volvió a hablar. Más bien se han decretado incrementos salariales demagógicos sin que haya en las arcas del Tesoro ni siquiera los recursos para pagar los sueldos de antes del aumento. Hoy, con bonanza petrolera y todo, la situación es peor que hace cuatro meses. El problema es que los ajustes inconclusos o incompletos hacen el daño sin obtener ningún beneficio. Verdaderamente no es justo con la población, especialmente con los principales dolientes: los pobres.

Ha hecho falta el cambio de los ministros de la economía para que se le empiece a hablar claro al país sobre la magnitud del problema fiscal. Al problema estructural del déficit y de las necesidades de financiamiento, se le ha añadido un desfase coyuntural de caja que le ha impedido a la Tesorería atender sus compromisos corrientes desde principios de año. En términos reales, el gasto público desembolsado del primer cuatrimestre ha disminuido 30 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Ello está generando enorme conflictividad social (universidades, gremios de empleados públicos...). La escasez de caja continuará por tres meses más, ya que sólo los vencimientos de deuda pública interna de junio a agosto ascienden a 2.23 billones de bolívares, el 65 por ciento de todos los vencimientos internos del año 2002. Más allá del problema temporal de caja permanece impávida la dura realidad de que el gobierno necesita financiamiento por aproximadamente 8.000 millones de dólares (8 billones de bolívares, equivalentes a un tercio del presupuesto total de gastos). De este monto, poco más de la mitad es para amortizar deuda que vence este año y el resto es endeudamiento nuevo.

### Ajustes a la carta

La piedra angular del nuevo paquete de ajuste será, por lo tanto, cómo atender esta necesidad de financiamiento o cómo reducirla. Están en el menú algunas de las siguientes medidas:

Para reducir el déficit (brecha de financiamiento):

- Aumentar impuestos internos: la única medida eficiente sería incrementar la tasa del IVA (se habla de 2 %) y/o eliminar buena parte de las exenciones.
- Aumentar aporte fiscal petrolero: habría que obligar a PDVSA a pagar dividendos extraordinarios y ello implicaría usar buena parte de los recursos que esa empresa tiene en el FIEM (4.100 millones de dólares).
- Disminuir el gasto desembolsado: ello puede hacerse sanamente mediante recortes presupuestarios o menos sanamente dejando de pagar obligaciones con contratistas y proveedores del Estado.

Para ampliar fuentes de financiamiento:

- Préstamos de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF): se ha mencionado la cifra de 3.500 millones de dólares.
- Préstamos de la banca nacional: habría que inyectar liquidez al sistema financiero mediante, por ejemplo, una reducción adicional del encaje legal en el BCV para que los bancos puedan comprar títulos de deuda pública.

Lo deseable es que se adopten medidas sanas de reducción del déficit fiscal, principalmente reducción de gastos no eficientes y, en menor medida, aumento de la recaudación. El problema es que, primero, el 75 % del presupuesto de gastos es rígido y, segundo, la situación socio-política no deja tampoco margen de maniobra. Por otro lado, exprimir a PDVSA más allá de lo razonable es matar la gallina de los huevos de oro, con el agravante de la pésima señal que significaría vaciar el FIEM en un momento en el que el precio del petróleo está por encima de 20 \$/bls.

Por eso es que se necesita ampliar las fuentes de financiamiento. Se ha pretendido crear la ilusión de que los

El país está a la espera de un nuevo paquete de medidas económicas. En ese parto anda ocupado el nuevo ministro de Hacienda, Tobías Nóbrega, un economista con vocación política, quien sabe balancearse entre un abordaje técnico de la economía y cruzadas guerrilleras con mucho sesgo y poco escrúpulo. Deseamos que prive la primera cualidad en su nueva tarea. A tono con la profunda escisión política del país, arranca su gestión con una matriz de opinión muy pernicioso sobre las medidas que debe adoptar. Algunos elementos que se han filtrado suenan a ajuste ortodoxo neoliberal. Los opositores del régimen, empresarios incluidos, vaticinan que Chávez no va a validar un programa de esas características. Y si lo hace por necesidad o por ingenuidad, no tardará en retirarle su apoyo. Los oficialistas, por su parte, buscarán por todos los medios sacar del programa su lado no popular y, de lograrlo, le restarán toda credibilidad. En cualquier caso, las principales medidas tendrán que pasar a debate de la Asamblea Nacional, donde la oposición no perderá la oportunidad de arrinconar al gobierno. Un programa de estabilización de este calibre requiere de un mínimo piso político, que hoy no existe.

### Después de Carnaval

Inteligentemente, el ministro Nóbrega intentará vender el paquete como una continuación y profundización de las "medidas de Carnaval" (12 de febrero de 2002), que fueron bien recibidas en su momento a pesar de su

bancos multilaterales nos van a sacar del atolladero. Mientras que el FMI no nos otorgue un certificado de "buena conducta", estos entes se limitarán a completar el financiamiento de programas concretos ya en marcha, aprobados en administraciones anteriores, pero que habían sido desatendidos por este gobierno. Sinceramente no veo sentándose a negociar con el FMI a un gobierno perjudicado ideológicamente y arrinconado políticamente. Queda la puerta de los mercados privados internacionales (emisiones de eurobonos, por ejemplo), pero Venezuela tendría que pagar hoy intereses muy altos, que encarecerían indirectamente el resto de la deuda externa presente y futura. Consiguientemente, la banca nacional tendría que absorber buena parte del financiamiento del déficit, para lo cual el BCV tendría que reducir sustancialmente el encaje legal, sopena de una elevación drástica de la tasa de interés. No nos engañemos: éste es un financiamiento monetario camuflado por parte del BCV al gobierno. Los recursos liberados del encaje terminarán incrementando el circulante y ejerciendo presión sobre la inflación y, finalmente, sobre las reservas internacionales.

### ¿Cómo quedan los pobres?

Por donde quiera que se mire, arreglar el hueco fiscal exigirá medidas de envergadura. Cuanto más sanas y estructurales sean éstas, más dolorosas serán para la población en un inicio. Pero si se opta por medidas cortoplacistas fáciles, como raspar la olla del FIEM o endeudarse a cualquier costo, el impacto social inmediato será menor, porque estaríamos simplemente corriendo la arruga. La pregunta crucial, por lo tanto, es: ¿dada la irresponsable crisis fiscal generada por el dúo Chávez-Giordani, existe algún plan de ajuste que sea menos injusto para la población de menores recursos?

El hecho de que el gobierno haya estado gastando por encima de sus posibilidades significa que todos los ciudadanos tienen que aceptar una disminución del ingreso real. Pero para que esa carga sea equitativamente distribuida, las medidas no pueden reducirse a las acciones que más afec-

tan a los pobres: inflación y deterioro de los servicios públicos. En concreto, ello significa que el cierre de la brecha fiscal no puede provenir de la devaluación, ni de recortes presupuestarios en servicios básicos, ni de una expansión inflacionaria de la liquidez. Consecuentemente, el financiamiento externo se presenta como la vía menos gravosa socialmente, con la gran ventaja adicional de que los entes financieros internacionales le van a exigir al gobierno que acometa las reformas estructurales que cierren sanamente la brecha fiscal. Cualquier medida de eficiencia de gasto, privatización, reducción de burocracia, etc. terminará a la postre favoreciendo a los pobres. También favorece a los pobres incrementar la recaudación fiscal interna mediante la reducción de la evasión más que por la vía de aumentar las tasas impositivas. El financiamiento externo permite una holgura de tiempo para realizar un ajuste fiscal más gradual y menos regresivo en su impacto social. La clave está, insistimos, en que los recursos externos no sean otra excusa más para correr la arruga y no acometer las reformas internas.

Concomitantemente harán falta dos frentes de trabajo adicionales: un programa social de alivio de la pobreza, cuyos recursos deben provenir de ahorros por mejoras de eficiencia en otras áreas de la administración pública, y un programa de estímulo a la actividad productiva que revierta el acelerado proceso de destrucción de empleo y de informalización de la economía.

### Viejo drama populista

Al final del día, a los pobres se les afecta por dos vías: por la inflación, que suele ser producto del mal manejo fiscal, y por el desempleo, que suele reflejar la desconfianza de los inversionistas en la gestión gubernamental. Mucho se reclama la ausencia de políticas sectoriales de estímulo y mucho es ciertamente lo que este gobierno ha pecado por omisión en ese campo, pero el mayor daño viene de su relación perjudiciada y justiciera con los dueños del capital, quienes han llegado a poner en duda hasta el apego oficial al principio más sagrado de la economía, como es la pro-

riedad privada y la libertad de iniciativa económica. El conjunto de leyes aprobadas bajo el paraguas de la Ley Habilitante en noviembre de 2001 constituyó un error garrafal que terminó de congelar todos los planes de inversión del sector privado. A partir de ese momento, la economía real se ha sumergido en una profunda recesión. Nadie está dispuesto a invertir mientras se vocifere una presunta revolución, aunque ésta no sea más que furia y ruido en un mar de ineptitud. Lamentablemente, mientras persista este clima político poco será el efecto de planes de reactivación. Sin embargo, algo se puede hacer en el campo de la construcción impulsada por el gasto público, especialmente viviendas.

Inquieta el entorno socio-político en el que se está elaborando el paquete económico. Si es ortodoxo fondomonetarista, vamos a tener muchos más pobres. Si el gobierno prefiere eludir las soluciones de fondo y decide seguir "pedaleando" la crisis fiscal, llegará el día en que un ajuste más drástico se imponga con violencia de huracán. Si el nuevo equipo económico elabora un plan sensato, pero la intransigencia política de ambos bandos lo hace inviable, la población sufrirá sus efectos negativos iniciales, como devaluación e inflación, sin disfrutar de sus beneficios en materia de inversiones, crecimiento y estabilidad inflacionaria. Es el viejo drama de los gobiernos populistas, en los que el amor por el pueblo, la ignorancia y la ineptitud compiten en una carrera perversa hacia la generación de más pobreza.

**Miguel Ignacio Purroy**  
Economista